

Noviembre 15 de 1946

69ª REUNION — 7ª SESION EXTRAORDINARIA

Presidencia del doctor JUAN HORTENSIO QUIJANO, vicepresidente de la Nación

Secretarios: señores ALBERTO H. REALES y SANTIAGO A. JOB

SENADORES PRESENTES:

ANTILLE, Armando G.
 ARRIETA, Alfredo J. L.
 AVENDAÑO, Arcadio B.
 BASALDUA, Juan Carlos
 BAVIO, Ernesto F.
 BUSQUET, Alfredo
 CRUZ, Luis
 FIGUEIRAS, Demetrio
 GÓMEZ DEL JUNCO, Felipe
 GÓMEZ HENRÍQUEZ, Samuel
 HERRERA, Julio
 LUCO, Francisco R.
 MARTÍNEZ, Ramón Linidor
 RAMELLA, Pablo A.
 SOSA LOYOLA, Gilberto
 TANGO, Miguel A.
 TASCHERET, Oscar
 TEISAIRE, Alberto
 VALLEJO, César
 ZERDA, Justiniano de la

AUSENTES, EN MISIÓN ESPECIAL:

AMELOTTI, Osvaldo
 DURAND, Alberto
 LORENZÓN, Ricardo Octavio
 MOLINARI, Diego Luis
 SAADI, Vicente Leonides
 SOLER, Lorenzo (h.)

AUSENTES, CON AVISO:

LÁZARO, Juan Fernando de
 MATHUS HOYOS, Alejandro

SUMARIO

1.—Asuntos entrados:

I.—Comunicaciones de la H. Cámara de Diputados.

II.—Comunicaciones del Honorable Senado.

III.—Despachos de comisión.

2.—A moción del senador Gómez del Junco, se resuelve tratar sobre tablas los despachos de la

Comisión Especial encargada del estudio del plan de realizaciones e inversiones, relativos a creación del Cuerpo de Abogados del Estado, y voto de los suboficiales.

3.—Consideración del despacho sobre creación del Cuerpo de Abogados del Estado. Se aprueba.

4.—Consideración del despacho sobre voto de los suboficiales de las fuerzas armadas. Se aprueba.

5.—Manifestaciones del senador Ramella acerca del voto femenino.

6.—A moción del senador Antille, se resuelve solicitar el pronto despacho en el proyecto en revisión de sancamiento y urbanización del bañado de Flores.

7.—Apéndice:

I.—Sanciones del Honorable Senado.

II.—Comunicaciones al Poder Ejecutivo.

—En Buenos Aires, a los quince días del mes de noviembre de 1946, siendo las 17 y 15, dice el

Sr. Presidente. — Queda abierta la sesión, con la presencia de 16 señores senadores.

1

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. — Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

I

Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados

Comunica que ha dado sanción definitiva a los proyectos de ley pasados en revisión sobre sueldos

correspondientes al anexo A del presupuesto general de gastos de la Nación; y acordando un crédito al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto por la suma de \$ 200.000 m/n., con destino a los gastos de la delegación argentina que asistió a la IV Asamblea General del Instituto Panamericano de Consulta sobre Cartografía. (*A sus antecedentes.*)

II

Comunicaciones del Honorable Senado

La Presidencia, en la fecha ha comunicado por nota al Poder Ejecutivo, la sanción definitiva de los proyectos de ley sobre prórroga de las locaciones en vigencia; fijando el presupuesto del anexo A; y por el que se abre un crédito al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto por la suma de \$ 200.000 moneda nacional.

III

Despachos de comisión

La Comisión Especial Encargada de estudiar el Plan de Realizaciones e Inversiones, y los proyectos de leyes que lo integran, se ha expedido en el proyecto de ley sobre otorgamiento de derechos electorales a los suboficiales de las fuerzas armadas, y en el de creación del Cuerpo de Abogados del Estado.

2

MOCION

Sr. Gómez del Junco. — Pido la palabra.

Solicitaría que estos dos despachos se traten sobre tablas, en el siguiente orden: primero, la ley de formación del Cuerpo de Abogados del Estado, y luego, la inclusión de los suboficiales de las fuerzas armadas en la ley electoral, con el derecho de voto.

Son dos proyectos de ley que forman parte del plan quinquenal enviado por el Poder Ejecutivo y nos abocaremos así, de lleno, al estudio del mismo, tratándolo ley por ley. De esta manera comenzaríamos la tarea que el Senado se ha impuesto de sancionar el plan dentro de lo posible, y antes de que finalice el año, ley por ley, a fin de que el Poder Ejecutivo pueda cumplir su propósito de ponerlo en marcha a partir del 1º de enero próximo.

Hago moción, pues, de que se traten sobre tablas los dos proyectos, en el orden indicado.

—Apoyado.

Sr. Presidente. — Se va a votar la moción formulada por el señor senador por Córdoba.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Se va a dar lectura del despacho.

3

CREACION DEL CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO

—Se lee:

Despacho de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión Especial encargada de estudiar el Plan sobre Realizaciones e Inversiones y los proyectos de leyes que le acompañan presentados por el Poder Ejecutivo, ha considerado el referente a la creación del Cuerpo de Abogados del Estado; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja le prestéis vuestra aprobación en la siguiente forma:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Créase el Cuerpo de abogados del Estado. Tendrá a su cargo el asesoramiento jurídico y la defensa ante los tribunales, del Poder Ejecutivo y de todos los organismos que integran la administración.

Art. 2º — Será director general del cuerpo el procurador del Tesoro y en caso de ausencia o impedimento de éste, el subprocurador del Tesoro sin perjuicio de las funciones que tienen asignadas por leyes especiales. Estos serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.

Art. 3º — El Cuerpo de Abogados del Estado se compondrá de una dirección general y delegaciones en cada uno de los ministerios, secretarías de Estado y reparticiones de la administración de jurisdicción nacional que tengan actualmente constituidas asesorías o direcciones de asuntos legales y las que en lo sucesivo puedan crearse.

Art. 4º — Serán funciones del Cuerpo de Abogados del Estado que se ejercerán por la dirección general o por las distintas delegaciones según corresponda:

- a) Representar al Estado y a sus reparticiones ante las autoridades judiciales, tanto si aquél litiga como actor o si lo hace como demandado, siempre que no corresponda esta actuación al ministerio fiscal. También representarán al Estado ante los tribunales contenciosoadministrativos;
- b) Instruir los sumarios que el Poder Ejecutivo o los organismos administrativos les encomienden para esclarecer la comisión de hechos punibles o irregularidades atribuidas al personal de la ad-

ministración o a terceros y preparar cuando corresponda el traslado a la autoridad judicial competente de lo actuado;

- c) Asesorar a las autoridades a que se hallen adscritos en todo asunto en que los mismos requieran una opinión jurídica;
- d) Promover el ajuste de los trámites administrativos a las leyes que los regulen y ser los ordenadores de lo contencioso del Estado, informando en la resolución de los recursos administrativos establecidos y que se establezcan y velando por el recto procedimiento;
- e) Intervenir los pliegos de condiciones para licitaciones públicas, redes de obras o servicios públicos o de adquisición de materiales; en las adquisiciones sin subasta previa cuando su importancia lo requiera, en la adjudicación en cuanto a la redacción de contratos, en las reclamaciones a que dé lugar la interpretación de éstos y en los pedidos de rescisión de los mismos. La reglamentación determinará los casos en que estas intervenciones sean necesarias;
- f) Asesorar sobre todo punto de interpretación legal o reglamentaria y en todo pedido de franquicia o exención de cualquier clase de contribuciones o impuestos y en aquellos casos en que deba decidirse sobre tributaciones que no se hallen expresamente previstas en las leyes y reglamentos;
- g) Realizar estudios profesionales para mejorar las leyes y reglamentaciones vigentes en la administración pública.

Art. 5º — La dirección general como asesora del Poder Ejecutivo y las delegaciones, comprenderán las asesorías de los distintos ministerios y reparticiones, pero estas últimas deberán supe-
 ditar su acción a las instrucciones que imparta la primera para unificar criterios. Además deberán elevarle en consulta aquellos casos cuya resolución pudiera implicar la fijación de un precedente de interés general para toda la administración, y solicitarán su patrocinio en los litigios en que se debatan asuntos de la misma índole o que por la magnitud de los intereses estatales en juego, requieran la atención de las autoridades superiores del cuerpo.

Art. 6º — La dirección general estará compuesta de los siguientes organismos:

- a) Dirección general con el número de funcionarios necesarios del cuerpo que fije la ley de presupuesto, que tendrán a su cargo la redacción de instrucciones generales, contestación de las consultas de las delegaciones y el patrocinio letrado de los asuntos a que se refiere el artículo anterior;

b) Inspección de delegaciones, que sostendrá el prestigio del cuerpo, la recta conducta y competencia de sus funcionarios y formará los tribunales calificadores para los ingresos y promociones preparando previamente los programas correspondientes;

- c) La dirección general bajo el ordenamiento del procurador del Tesoro podrá actuar como oficina técnica de derecho administrativo y de lo contencioso del Estado y se expedirá sobre todo proyecto de modificación o creación de normas legales o reglamentarias. Cuidará en tal sentido de que las delegaciones propongan las reformas que la realidad práctica aconseje.

Art. 7º — Las delegaciones se organizarán de acuerdo con las necesidades del organismo administrativo a que se hallen adscritas y dependerán disciplinariamente de este último, sin perjuicio de su dependencia de la dirección general desde el punto de vista estrictamente profesional. A tal efecto los departamentos del Estado solicitarán de la dirección general el número de funcionarios del cuerpo que según su organización sean necesarios.

Art. 8º — El Cuerpo de Abogados del Estado se constituirá como una carrera especial dentro de la administración con su escalafón propio. El ingreso a ella sólo podrá tener lugar mediante concurso oposición que demuestre en el aspirante, además de los conocimientos generales de derecho, conocimientos suficientes de derecho administrativo y organización del Estado. Las promociones se harán respetando rigurosamente el orden jerárquico y siempre con informe favorable de la inspección.

Art. 9º — Independientemente de la categoría correspondiente al puesto que se desempeñe, existirá la categoría personal a la que corresponderá ascenso por quinquenios.

Art. 10. — Para la formación del cuerpo se tendrá en cuenta la constitución actual de las asesorías letradas de los actuales organismos eligiendo a los funcionarios que desempeñen función específica para la que se necesite el título de abogado. Esta elección deberá hacerla el Poder Ejecutivo previo informe de la dirección general por medio de su inspección.

Art. 11. — El funcionario con empleo en la administración, aunque posea título de abogado no tendrá derecho a ser considerado como integrante del cuerpo si no desempeña funciones específicas de asesoramiento o abogacía, aunque se halle adscrito a una asesoría u oficina de asuntos legales.

Art. 12. — Una vez constituido el cuerpo sobre tales bases, se estudiarán las vacantes que pudieran llenarse y las que en lo sucesivo convenga ocupar y se llamará a concurso opo-

sición para completar el número de funcionarios componentes del cuerpo.

Art. 13. — Para el ingreso en el Cuerpo de Abogados del Estado es necesario: 1º, ser ciudadano argentino; 2º, poseer el título de abogado expedido por una universidad nacional; 3º, ser mayor de 25 años; 4º, informes de conducta dimanados de las autoridades y de una investigación especial; 5º, no estar sujeto a ningún procedimiento de carácter penal; y 6º, no hallarse en quiebra ni en concurso.

Art. 14. — La dirección general elaborará el programa de materias y de los ejercicios teóricos y prácticos que deban constituir el concurso oposición, y la reglamentación determinará la constitución del tribunal clasificador y la forma de actuar del mismo para calificar a los aspirantes. El orden de clasificación determinará el lugar que en lo sucesivo ocupe en el escalafón del cuerpo.

Art. 15. — Ninguna repartición nacional podrá nombrar asesor letrado ni otra clase de funcionario que específicamente ejerza función para la que se necesite el título de abogado sin oír previamente a la dirección del Cuerpo de Abogados del Estado; ésta examinará si la función que quiere encomendarse al funcionario encuadra dentro de las que corresponde al cuerpo y siendo así propondrá el nombre de los funcionarios que se encuentren en condiciones de ocupar tales cargos.

Art. 16. — Los abogados del Estado podrán ser trasladados de una repartición a otra por necesidades del servicio o cuando lo disponga la dirección general para la mejor formación profesional de los funcionarios del cuerpo.

Art. 17. — Los haberes de estos funcionarios serán abonados por el departamento o repartición en que presten servicios y con cargo al presupuesto del mismo y la categoría que corresponda.

Art. 18. — La dirección central del cuerpo seleccionará los funcionarios que actualmente presten servicios, incluso sometiendo a concurso oposición.

Art. 19. — Esta ley es asimismo de aplicación a las asesorías legales de las instituciones bancarias del Estado.

Art. 20. — El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley en el término de noventa días.

Art. 21. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la comisión, 15 de noviembre de 1946.

Luis Cruz. — Pablo A. Ramella. — Samuel Gómez Henríquez. — Alberto Teisairé. — Oscar Tascheret. — Alfredo Busquet. — Gilberto Sosa Loyola. — Alfredo J. L. Arrieta. — Armando G. Antille. — Ernesto F. Bavio. — Demetrio Figueiras. — César Vallejo.

Sr. Presidente. — Está en consideración en general.

Sr. Antille. — Pido la palabra.

El proyecto de ley cuya discusión se iniciará en seguida, es el primero de los que componen los proyectos que forman el plan quinquenal enviado por el Poder Ejecutivo al Honorable Senado.

Este proyecto tiene por objeto formar el cuerpo de abogados del Estado, bajo una dirección general, tratando de unificar la acción de todos los asesores que, hasta ahora, lo hacen prestando, sin coordinación, sus servicios jurídicos a las reparticiones autónomas o autárquicas y a los ministerios, según corresponda. Se ha querido dar con esta ley una unidad jurídica al conjunto de los servicios que prestan al Estado los abogados designados con este fin. El Poder Ejecutivo entiende que tendrá una mejor representación y asesoramiento si se lleva a la práctica este ordenamiento jurídico, dándole esta dirección general, y si se establecen las formas como ante estos servidores del Estado han de tramitarse los asuntos administrativos y, a la vez, si se establecen las funciones que éstos han de llenar ante los poderes judiciales, ante los funcionarios que compondrán los tribunales en lo contencioso-administrativo, y también, ante los terceros que han de gestionar ciertas cuestiones referentes a sus intereses frente a la Nación.

La comisión que ha estudiado y despachado este proyecto ha entendido que es altamente conveniente constituir un ordenamiento de esta especie, que tenga una dirección única, que se ha atribuido al señor procurador general del Tesoro con el nombre de director general del cuerpo de abogados.

Distintos abogados han ido sumándose al servicio de la Nación, a medida que se han creado reparticiones que han necesitado de estos servicios, sobre todo las reparticiones autárquicas; pero ninguno de ellos ha funcionado en forma coordinada y bajo una dirección única, hasta ahora. Los ministerios también tienen sus asesores y el procurador general del Tesoro tiene una función especial como auxiliar y representante del Estado en la atención de las cuestiones judiciales que se plantean. Por eso es que era necesario darle a este conjunto de servidores jurídicos una unidad y una dirección, que se ha hecho recaer, como he dicho, en el señor procurador del Tesoro.

Las funciones de este cuerpo de asesores han de ser las que se determinan con claridad en los artículos del proyecto, vale decir, representar al Estado y a las reparticiones ante las autoridades judiciales y ante los tribunales contencioso-administrativos; evacuar las consultas que las autoridades administrativas les soliciten; instruir los sumarios que sean indispensables.

bles para establecer la forma cómo se procede en el conjunto de abogados que prestan servicios jurídicos y cómo desempeñan sus funciones; asesorar a las autoridades a que se hallan adscritos, en cualquier asunto en que se les requiera un informe y promover el ajuste de los trámites administrativos a las leyes que los regulan, y ser los ordenadores en los casos contenciosos del Estado, informando en las resoluciones de los recursos administrativos establecidos o que se establezcan; intervenir en los pliegos de condiciones para licitaciones públicas, redes de obras de servicios públicos o adquisición de materiales, etcétera; asesorar, en fin, sobre todo punto de interpretación legal o reglamentaria y en todo pedido de franquicias o exención de cualquier clase de contribuciones o impuestos, y realizar los estudios profesionales que sean indispensables para mejorar las leyes y las reglamentaciones.

La Dirección General del Cuerpo de Abogados se compondrá de diversos organismos. En el punto a) del artículo 6º, se establece que es uno de estos organismos la dirección general, con el número de funcionarios necesarios del cuerpo, los que tendrían a su cargo la redacción de las instrucciones generales, contestación de las consultas de las delegaciones y el patrocinio letrado de los asuntos a que se refiere este proyecto de ley. Se compondrá también de la inspección de delegaciones, que sostendrá el prestigio del cuerpo de abogados, y la recta conducta y competencia de dichos funcionarios.

Además, esta dirección general, bajo la dirección del procurador del Tesoro, podrá actuar como una oficina técnicoadministrativa, en lo administrativo y en lo contencioso del Estado, y se expedirá sobre todo proyecto de modificación o creación de normas legales o reglamentarias.

Se establece en la ley cuáles serán las condiciones para que pueda entrar un abogado a formar parte del cuerpo de abogados, siendo designados para cualquiera de los cargos asesores por el Poder Ejecutivo, con estos requisitos establecidos con claridad en el artículo, en el que se determina que deben ser los abogados ciudadanos argentinos, poseer el título de abogado expedido por una universidad nacional, ser mayor de 25 años, tener informes de su conducta dimanados de las autoridades y de la investigación especial que pueda realizar el cuerpo de inspecciones de delegaciones; no estar sujeto a ningún procedimiento de carácter penal, y no hallarse en quiebra ni en concurso.

Estos abogados, después de presentar un informe y ser sometidos a un examen en concurso de competencia, del cual debe juzgar el cuerpo de inspectores o tribunal de calificaciones, entrarán a formar parte del cuerpo de abogados. En su origen, la ley establece que todos los abogados que presten servicios jurídicos, que sean

asesores actualmente, entren a formar parte de hecho, inmediatamente, como una entidad ya creada, del cuerpo de abogados que se crea por la ley.

Se prevé la posibilidad de ampliar o de rellenar las vacantes que fueran indispensables, en la forma que se ha establecido, es decir, por la vía del concurso a que se someterán ante los tribunales de calificación.

Más adelante, se establece que esta ley ha de regular los servicios de todos los abogados asesores que existan actualmente, sin excluir a las entidades bancarias, sobre las cuales el Poder Ejecutivo establecerá una reglamentación especial.

Con estas explicaciones, que creo suficientes, dada la claridad de la ley y la reglamentación precisa que ha sido presentada, entiendo que el Senado debe prestarle su aprobación.

Sr. Bavio. — Dado que todos los señores senadores han leído el proyecto y han intervenido en la discusión al proyectar este despacho, podría votarse en general, y luego en particular, en cuya oportunidad se leerá artículo por artículo, aprobándose aquellos que no sean observados.

—Apoyado.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — En consideración en particular. Los artículos que no se observen, se darán por aprobados.

—Se leen y aprueban sin observación los artículos 1º a 7º.

—Se lee el artículo 8º.

Sr. Sosa Loyola. — Pido la palabra.

Deseo formular una pregunta al señor miembro informante. En el artículo 8º, al referirse al ingreso a la carrera administrativa, dice que sólo podrá ser posible mediante concurso oposición, que demuestre en el aspirante además de los conocimientos generales de derecho, conocimiento suficiente de derecho administrativo y de organización del Estado.

Si son abogados los que van a formar ese cuerpo ¿por qué hablar de conocimientos generales de derecho y conocimientos suficientes de derecho administrativo? Un abogado, egresado de una universidad nacional, se presume que debe tener algo más que conocimientos generales de derecho; debe tener conocimientos especiales. Y en cuanto a conocimiento suficiente de derecho administrativo, en las universidades nacionales se estudia el derecho administrativo más que suficientemente.

Me llama un poco la atención esta enunciación del artículo 8º.

Sr. Antille. — Pido la palabra.

Voy a explicarle al señor senador el motivo de la nueva redacción de la ley. En el proyecto del Poder Ejecutivo, se exigían profundos conocimientos de derecho administrativo. La comisión y el bloque de senadores que estudió este asunto, entendió que bastaba tener, no profundos, sino suficientes conocimientos de derecho administrativo, y entonces modificó el proyecto del Poder Ejecutivo, juzgando, como dice el señor senador, que el que tenga los conocimientos que requiere la obtención del título de abogado, tiene también conocimientos administrativos y no habría para qué establecer una nueva exigencia distinta a la que habilita el título para poder intervenir en la iniciación de la carrera administrativa a que se refiere la ley.

De manera que se modificó la palabra «profundos» por la de «suficientes» conocimientos.

Esta es la explicación que doy al señor senador del porqué aparece en la redacción de este proyecto una cierta redundancia, puesto que la ley exige, además del título de abogado, conocimientos suficientes de derecho administrativo y de organización del Estado. En realidad es una superabundancia, puesto que ya está dicho que al ser abogado se tienen conocimientos generales de derecho y conocimientos suficientes de derecho administrativo, pero se agrega este requisito en una forma especial, porque se trata de una carrera administrativa que la ley debe reglamentar.

Sr. Bavio. — Pido la palabra.

Entiendo que el espíritu de la ley es explicar que se desea formar un cuerpo de especialistas en materia de derecho administrativo y público. Por eso la ley ha abundado en la explicación de las condiciones que deben tener los nuevos funcionarios de esta dependencia.

Sr. Sosa Loyola. — No me gusta la redacción que le ha dado la comisión.

Sr. Bavio. — Se ha respetado el proyecto del Poder Ejecutivo con pequeñas modificaciones.

Sr. Sosa Loyola. — Yo aceptaría que se exigiesen conocimientos especiales, pero no encuentro admisible requerir conocimientos generales de derecho, porque un abogado egresado de cualquier universidad nacional debe tener más que conocimientos generales de derecho. Por esta razón, si la comisión acepta, propondría que se suprima esa parte.

Sr. Bavio. — El artículo dice: «... además de los conocimientos generales de derecho, conocimientos suficientes de derecho administrativo y organización del Estado»; luego, entonces, la ley quiere que además de los conocimientos generales que le da el título de abogado, se trate de verdaderos especialistas en materia de derecho administrativo y público.

Sr. Sosa Loyola. — Estoy de acuerdo. Entonces introduzcamos la palabra «especialistas», que responde mejor al espíritu de la comisión.

Sr. Cruz. — Se podría decir «conocimientos prácticos».

Sr. Tascheret. — Por algo se habla de concurso de oposición.

Sr. Sosa Loyola. — Esta segunda fórmula tampoco la encuentro aceptable; si se pudiera, repito, la palabra «especialistas» o «especialización», lo encontraría viable.

Sr. Antille. — Voy a ampliar la explicación que he dado.

Desde luego, el título de abogado es indispensable para formar parte del cuerpo de abogados, pero además se exige un concurso de oposición entre los aspirantes a incorporarse a esta carrera, y en este concurso hay que demostrar que se poseen no solamente conocimientos generales de derecho, sino conocimientos especiales de derecho administrativo y de organización del Estado. Eso es lo que debe probarse en el examen de suficiencia que se ha de rendir ante una comisión que recibirá la prueba de oposición.

Creo que con esta aclaración se podría respetar la redacción, puesto que el pensamiento es claro. Si el señor senador insistiera en su punto de vista, yo aceptaría que se suprima todo y se deje solamente la exigencia del título de abogado.

Sr. Bavio. — Pareciera que la ley ha querido justificar la exigencia del concurso para optar a esos cargos, y por eso ha abundado un poco.

Sr. Tascheret. — Es el caso de los médicos, que deben rendir examen para optar a una determinada especialidad. En este caso se trataría de una exigencia de conocimientos administrativos y de materias de organización del Estado.

Sr. Sosa Loyola. — Si esa redacción significa un concepto de especialización, no tengo nada que objetar.

Sr. Bavio. — Por otra parte, creo que con este pequeño debate alrededor del asunto, se ha aclarado el concepto, que servirá para la interpretación de la ley en el futuro. De manera que el mismo ha sido interesante.

Sr. Presidente. — Si no se hace otra observación, se dará por aprobado el artículo.

—Se aprueba sin observación el artículo 8º.

—Igualmente se aprueban sin observación los artículos 9º, 10, 11, 12, 13 y 14.

—Se lee el artículo 15.

Sr. Bavio. — Pido la palabra.

En este artículo, señor presidente, se ha introducido una modificación interesante, y es que en lugar de decirse «designará», se dice «propondrá», que es lo que corresponde en este caso, ya que la designación deberá hacerla el Poder Ejecutivo.

Sr. Antille. — Efectivamente, es así. En todos los casos, sin excepción diría, constitucionalmente la designación corresponde al Poder Ejecutivo, por decreto; pero en algunas ocasiones se ha delegado esta facultad en las reparticiones autárquicas, y en este caso pueden ellas nombrar, como nombran, asesores; pero aquí se exige que se llene el requisito de que sean propuestos directamente por el Cuerpo de Abogados los funcionarios que habrían de designarse por esas reparticiones. Por eso se establece que ninguna repartición hará la designación sin oír previamente al Cuerpo de Abogados, el que propondrá los candidatos después de estudiar sus antecedentes.

Sr. Sosa Loyola. — Pido la palabra.

De conformidad con el despacho, la designación de acuerdo a la proposición del Cuerpo de Abogados, ¿es obligatoria?

Si fuera así, yo votaría en contra.

Sr. Antille. — No es obligatoria la aceptación de la proposición. Precisamente la comisión encontró la dificultad de que la propuesta fuera a favor de un solo funcionario, y se resolvió emplear la palabra «funcionarios», en plural, para que así, con la presentación de varios nombres, se hiciera la elección que correspondiese por parte de la repartición o del Poder Ejecutivo, según el caso. De manera que no es obligatorio aceptar al funcionario que se proponga en primer término, pero es de entender que el Cuerpo de Abogados ha de proponer a los mejores. Precisamente, la ley tiende a reglamentar la forma de seleccionar y de elegir —previo estudio y examen— a los mejores abogados. Pero no podemos votar en contra de una ley que trata de hacer una carrera regular y por selección. Me extrañaría que el señor senador votara en contra de esto porque me parece un adelanto que la designación del personal sea por esta vía de selección que se propone.

Sr. Sosa Loyola. — Muy bien, señor senador. Pero podría darse el caso de que abogados suficientemente capacitados, profesores de derecho, maestros universitarios que no forman parte de este cuerpo, no puedan ser nombrados por el Poder Ejecutivo.

Sr. Gómez del Junco. — No pueden ser designados porque no han hecho carrera.

Sr. Antille. — El sentido de la ley es determinar el procedimiento que constituye una carrera administrativa dentro de los funcionarios que han de constituir este nuevo cuerpo. Precisamente, la mente de la ley es mejorar la situación de los abogados, que no se escoja por razones de influencia, como a veces ha ocurrido, a cualquier abogado, por el hecho de que se tenga la presunción de sus conocimientos en virtud del título que presenta.

Aquí es necesario que inicie la carrera, demostrando su capacidad y competencia en un examen, frente a tribunales que han de calificarlo. Cuando cualquiera de las oficinas necesita un asesoramiento, que se escoja a quien tiene más condiciones y quienes han de determinar esto son las oficinas del organismo técnico que dispone de un cuerpo de inspectores, con este fin.

Me parece que estos son requisitos que tienden a conseguir una mejor designación. Lo único que puede pensarse es que el Poder Ejecutivo estaría restringido en su derecho de designación. Nadie desconoce el precepto constitucional que lo faculta a nombrar a los empleados. Esta disposición no va contra la facultad del Ejecutivo, porque éste podría hacer incorporar al Cuerpo de Abogados, previas las exigencias de esta ley, a quienes deseara nombrar.

De manera que no hay ni siquiera restricciones del precepto constitucional y por la vía propuesta hay una selección, por lo que considero que no cabe ninguna objeción a este artículo.

Sr. Sosa Loyola. — Entonces, ¿el Poder Ejecutivo quedaría en libertad de acción?

Sr. Antille. — Cuando quisiera podría reivindicar su derecho. La ley no es contraria al precepto constitucional. Establece para las reparticiones nacionales un requisito que ellas sí están obligadas a cumplir.

Sr. Sosa Loyola. — Muy bien, señor senador.

Sr. Presidente. — ¿Retira la observación, señor senador?

Sr. Sosa Loyola. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente. — Queda entonces, aprobado el artículo 15 en la forma propuesta.

—Sin observación, se votan y aprueban los artículos restantes del despacho.

Sr. Presidente. — Queda sancionado.

4

VOTO DE LOS SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS

—Se lee:

Despacho de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión Especial encargada de estudiar el plan sobre realizaciones e inversiones y los proyectos de leyes que le acompañan, presentados por el Poder Ejecutivo, ha considerado